

A DERECHIZACION EN EL NUEVO CAPITALISMO LATINOAMERICANO*



Beatriz Stolowicz Weinberger**

65

Tiempos conservadores en América Latina. Una temática y una preocupación que empiezan a tener cierta presencia, demasiado escasa todavía, en el pensamiento social de la región. Fuera de algunos valiosos trabajos que dan cuenta de este fenómeno en el plano intelectual,¹ y de análisis coyunturales que trasuntan este tipo de preo-

*Versión corregida y actualizada del estudio "Dominación capitalista y derechización en América Latina", presentado como ponencia en el XVII Congreso Latinoamericano de Sociología, ALAS, en Montevideo, Uruguay, en diciembre de 1988.

**Profesora-investigadora del Área Problemas de América Latina del Departamento de Política y Cultura. UAM-Xochimilco.

¹Nos referimos en particular a los trabajos de Agustín Cueva de su libro *Las democracias restringidas en América Latina. Elementos para una reflexión crítica*, Planeta, Ecuador, 1988; a diferentes artículos de James Petras publicados en el semanario *Brecha de Uruguay*, entre ellos "El pecado de los intelectuales de Occidente", 8 de enero de 1987; al interesante trabajo de Raúl Latorre y Was-

cupaciones, el problema del conservadurismo, o del "neoconservadurismo" como se ha dado en llamar, no deja de ser un terreno poco explorado y que por lo general se refiere más a buscar en América Latina los posibles reflejos de lo que ocurre en "Occidente" (eufemismo de imperialismo), que en encontrar los factores genéticos de problemas que parecen, para muchos observadores, paradójicos.

Y claro, no puede dejar de parecer paradójico el hecho de que en un continente marcado por la miseria y la marginalidad, proliferen intelectuales que no sólo han abandonado el campo popular en su práctica política, sino que llegan a funcionalizar, como intelectuales orgánicos, mecanismos de dominación profundamente antipopulares.

La posibilidad de encontrar respuestas explicativas de éste y otros fenómenos expresivos de los avances conservadores en América Latina nos remite, necesariamente, a niveles más profundos en la génesis de las percepciones, de las visiones sociales, de las representaciones, etcétera; esto es, a las modalidades de las relaciones sociales, a sus mecanismos de reproducción.

Dilucidar el escabroso y poco definido campo de lo "conservador", no resulta sencillo, dada la variedad de interpretaciones y acepciones otorgadas al concepto y a sus derivaciones ("conservadurismo" y "neoconservadurismo"). La diversidad de puntos de partida conceptuales que existen para interpretarlos no nos permiten captar los rasgos específicos de cada una de estas expresiones ni identificar a los sujetos sociales de las mismas. En particular, ello sucede con el concepto "conservador", que genéricamente refiere al interés por conservar situaciones existentes, el *status quo*, el rechazo al cambio. Y si bien es cierto que en América Latina encontramos hoy fuertes tendencias conservadoras en nuestras sociedades, vinculadas fundamentalmente a la conservación de los sistemas de dominación capitalista —como fenómeno socio-político—, también es cierto que conductas conservadoras se expresan en sectores y niveles de relaciones sociales diversos (sexos, familia, etcétera). Por lo tanto, en la vastedad genérica, los términos "conservadurismo" o "neoconservadurismo" que encontramos en buena parte de los trabajos interpretativos de la nueva realidad latinoamericana, resultan insuficientes para identificar las tendencias principales que pautan los acontecimientos en la región.

En cambio, el concepto "derecha" (o "derechización" como derivado) ofrece una mayor adecuación a los requerimientos de conceptualización de la realidad, siempre que se haga un esfuerzo de precisión en sus contenidos, muchas veces ausente en el uso que se le ha dado. Cuando el término "derecha" se utiliza en la caracterización de espectros políticos de una sociedad concreta, predomina el sentido relacional que lo compara con otras expresiones como "centro" e "izquierda" de esa misma sociedad; pero la validez local de esta relación adquiere un carácter relativo para un análisis comparativo regional.

De ahí que un esfuerzo de precisión conceptual requiera de encontrar los elementos esenciales comunes a todo pensamiento de derecha, independientemente incluso de que quienes lo exhiban se autoidentifiquen o no como de "derecha". En la búsqueda de esos elementos comunes a todo pensamiento de derecha, encontramos como esencial su

hington Estellano: "El debate ideológico en la intelectualidad uruguaya" en *Los intelectuales de las ciencias sociales en el Uruguay*, publicado en Montevideo por el Centro de Estudios Sociales Montevideo (CESMO), 1988.

negación básica al igualitarismo social traducida en un profundo rechazo a lo popular, y una práctica política que tiende a excluir a los sectores subordinados de la sociedad capitalista, como destinatarios y sujetos de los procesos económicos, políticos y sociales. Tal vez la definición más clara y autoasumida de lo que se debe entender por "derecha" sea la ofrecida por el francés Alain de Benoist (en apartados posteriores tal definición podrá identificarse con similares expresiones de origen latinoamericano): "Llamo aquí de derecha, para entendernos, a la actitud que consiste en considerar la *diversidad* del mundo y, por consiguiente, las desigualdades *relativas* que necesariamente produce, como un bien, y la homogeneización progresiva de ese mundo, preconizada y llevada a cabo por el discurso bimilenario de la ideología igualitaria, como un mal. Llamo de *derecha* a las doctrinas que consideran que las desigualdades relativas a la existencia motivan *relaciones de fuerza* cuyo producto es el *devenir histórico*, y que la *historia* debe continuar (...)"² Ese anti-igualitarismo básico se da tanto entre sectores profundamente conservadores del orden actual (derecha tradicional) como entre aquellos que persiguen la conservación del orden mediante ciertas innovaciones (nueva derecha).

Las reflexiones siguientes —que forman parte de una investigación en curso— tienen el interés por desentrañar las características esenciales de los procesos de signo de derecha en la región, sus orígenes y consecuencias para millones de latinoamericanos.

En América Latina, la profundización de la desigualdad social y la marginación de las mayorías populares, ha sido una práctica que, con matices y diferencias, caracterizó la acción de los grupos dominantes, de manera creciente, en las dos últimas décadas. Asimismo, esa desigualdad ha determinado el agotamiento de los mecanismos dominantes basados en ciertas formas consensuales, que hasta mediados de los años sesenta se habían sustentado en mayores formas de distribución social de la riqueza generada en nuestros países. ¿Cuál ha sido el origen de estas modificaciones en las modalidades de la dominación capitalista en América Latina?

Muchos de los trabajos sobre el conservadurismo en la región, identifican a éste con una suerte de reflejo de los procesos ideológicos y políticos en Europa Occidental y Estados Unidos, particularmente a partir de la era Reagan-Tatcher.³ Es indudable que las modificaciones ocurridas en países que, por su condición imperialista, inciden de manera directa sobre nuestra región tienen efectos de magnitud significativa en imposiciones económicas, políticas, represivas y en violentas intervenciones atentatorias de nuestra soberanía. Sin embargo, los estudios más

²Benoist, Alain de. *La nueva derecha*, Planeta, Barcelona, 1982, p. 46.

³La visión "en reflejo" no siempre es explícita. Aun cuando se indica en muchos trabajos que el interés está en los procesos similares en América Latina, se concentran a describir y analizar lo que ocurre en Europa y Estados Unidos principalmente. Entre los interesantes trabajos, véanse: de Agustín Cueva "El viraje conservador. Señas y contrasenas" en el libro de varios autores *Tiempos conservadores. América Latina en la derechización de occidente*, en sus ediciones de Editorial El Conejo, Quito, 1987, y en U.A.M. Azcapotzalco, México, 1988. De Luis Maira: "La influencia de la Nueva Derecha en América Latina, Núm. extr. de la *Revista Mexicana de Sociología*, Vol. XLIII de 1981. De Atilio Borón: "La crisis norteamericana y la racionalidad conservadora" en *Cuadernos Semestrales del CIDE*, núm. 9, primer semestre de 1981, México. De Roberto Bouzas: "La política económica del gobierno republicano: contenidos, obstáculos y perspectivas", en *Cuadernos Semestrales del CIDE*, núm. 9, primer semestre de 1981.

profundos de la realidad de esos países, especialmente de Estados Unidos, nos llevan a dudar de una simetría cronológica y una relación causal simple entre esos procesos y los que se están viviendo en América Latina; de la misma manera, dudamos que el conservadurismo norteamericano sea un fenómeno realmente "nuevo".⁴ En este sentido, John Saxe-Fernández plantea la necesidad de reconocer que "mucho del pensamiento de la nueva derecha (norteamericana) forma parte central tanto de la herencia cultural de los Estados Unidos, como de las tendencias y de las campañas ideológicas que de maneras diversas han promovido y utilizado los grandes intereses monopólicos de ese país para la consecución de sus fines y la ampliación y preservación de su poderío (...)". Si bien es cierto que la llegada de Reagan a la presidencia de los Estados Unidos facilitó el acceso al poder de los sectores más ultraderechistas, "ese proceso de 'derechización' no ha sido producto o invención de la nueva derecha (...) En verdad estamos frente a los resultados de procesos económicos y políticos que gestados durante administraciones dirigidas por liberales, tanto republicanos como demócratas: los grandes momentos intervencionistas de los Estados Unidos han sido abrumadoramente justificados, durante toda su historia, por medio de las ideologías liberales y no por las conservadoras."⁵

El traslado mecánico de las categorías de análisis norteamericanas a la realidad latinoamericana, lo que ocurre frecuentemente, tiene el inconveniente, además, de carecer de contenidos correspondientes a nuestras realidades. Casi anecdóticamente, podemos referirnos a la acepción insultante que posee hoy en Estados Unidos el calificativo de "liberal", acusación de la que debió liberarse el candidato demócrata Dukakis ante la embestida de su oponente republicano George Bush, en las recientes elecciones presidenciales en ese país. En nuestra región, en cambio, los mismos admiradores del "gran país del norte" hacen del "liberalismo" la "panacea" de todos nuestros males.

Un fenómeno con rasgos propios

La derechización de la denominación en América Latina, es decir el carácter profundo y crecientemente excluyente de lo popular que la ha caracterizado desde hace dos décadas, tiene, a nuestro juicio, orígenes muy propios de los procesos económicos y sociales de nuestra región, aunque naturalmente tiene influencias ideológicas y políticas desde los países imperialistas.

Dos son, creemos, los orígenes específicamente regionales de este fenómeno que, como decimos, abarca ya dos décadas en nuestro continente; uno, de carácter *estructural*, vinculado a las condiciones mismas de reproducción del capitalismo latinoamericano y a las nuevas formas

⁴Las corrientes de la "Sociobiología" que se conocen en Estados Unidos son en realidad expresiones ultra conservadoras de un pensamiento evolutivista, organicista y funcionalista, como en general ha sido el pensamiento sociológico norteamericano de este siglo, exacerbando los aspectos más conservadores del mismo, con signos incluso racistas. Para una aproximación a las corrientes sociobiológicas, véase el trabajo de Catherine Nelson: "Estados Unidos: la sociobiología y el ocaso del Estado de bienestar", en el libro *Tiempos Conservadores* op. cit.

⁵De John Saxe-Fernández, especialista en Estados Unidos: "los fundamentos de la 'derechización' en Estados Unidos" en *Tiempos Conservadores...*, op. cit, pp. 68 y 73.

de inserción al mercado mundial que ésta le impone; y otro, de carácter *político*, signado por una crisis de la dominación consensual en la que confluyen los componentes económicos críticos del agotamiento del desarrollismo y un avance popular significativo en la mayoría de nuestros países desde finales de los sesenta.

El trasfondo económico de la derechización en América Latina.

Cuando afirmamos que los procesos de derechización en América Latina responden en lo fundamental a las condiciones de reproducción del capitalismo en la región, es decir, que son una consecuencia misma de las diferentes formas y niveles de dominación capitalista, no se hace gala de un determinismo económico simplista, sino reconociéndose factores estructurales profundos que condicionan, en el plano económico-social, tendencias excluyentes, crecientes y marginalizantes de las mayorías populares latinoamericanas, como basamento de procesos políticos e ideológicos de igual signo.

En el análisis regional se ha comprendido, en general, la relación existente entre las búsquedas de reestructuración neoliberal del capitalismo latinoamericano con la proliferación de regímenes autoritarios en la región, relación que analizaremos en apartados siguientes. Sin embargo, no se comprende con facilidad cómo una estrategia económica destructiva de las economías vistas desde el interés nacional (con desindustrialización,⁶ deterioro de sus infraestructuras, sus servicios, en los niveles de ingresos mayoritarios, con grandes deudas públicas y privadas internas y externas, con crisis agrícolas que hacen que en países agroexportadores los costos de la alimentación ocupen los rubros más elevados), pueda constituir un proyecto de reproducción capitalista que tiende a consolidarse en prácticamente todos los países de la región.

En otras palabras, parece haber una gran dificultad por integrar en el análisis sociopolítico esta doble realidad de economías capitalistas nacionales en crisis, con un fortalecimiento simultáneo de la acumulación capitalista en los polos más modernos y concentrados del capital. Siendo esos sectores los que imponen políticas económicas y mecanismos de dominación política e ideológica que continúan profundizando la marginación popular, es decir, que continúan profundizando procesos de signo de derecha, más allá de las posibles intenciones de algunos gobiernos o sectores democráticos.

Esta aparente paradoja pareciera ser la clave para comprender las bases estructurales de los avances de proyectos de derecha en América Latina, incluso cuando sus costos sociales han activado, en manifestaciones diversas de descontento, a millones de latinoamericanos y han intensificado los niveles de conflictividad en los diferentes países.

Sin pretender un análisis exhaustivo del fenómeno económico en nuestros países, importa rescatar algunos de sus rasgos más importantes que, por correlacionarse con efectos críticos para sus sectores mayoritarios, han puesto en entredicho las tradicionales formas de dominación en América Latina existentes hasta los años sesenta.

⁶En Perú, la producción industrial decae un 32.3 por ciento entre abril de 1988 y abril de 1989 y acumula un total de decrecimiento de 41.4 por ciento en los cuatro primeros meses de 1989. (Ministerio de Industria, Comercio, Turismo e Integración, véase diario *Excelsior* de México, 30 de mayo de 1989.

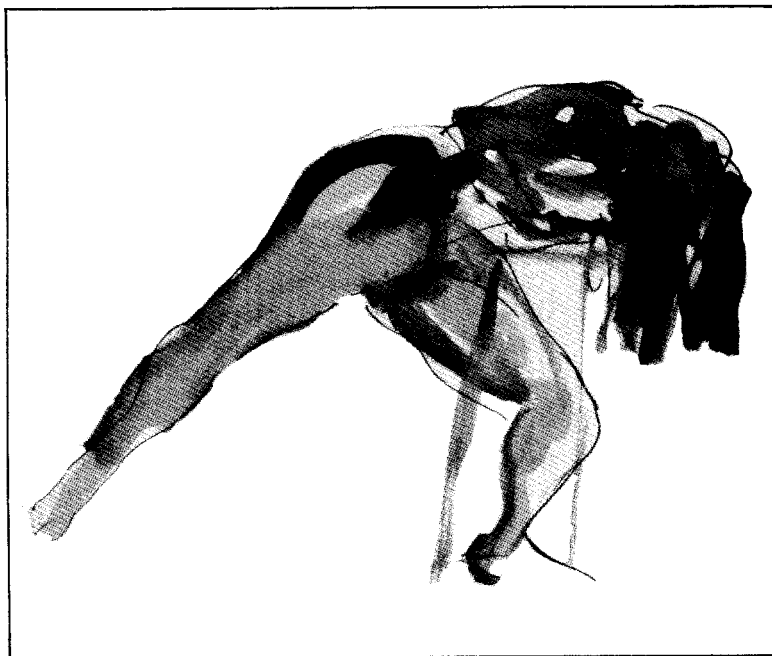
Se trata de un capitalismo reestructurado sobre la base de la hegemonía del interés financiero, y por tanto profundamente especulativo, que encuentra su racionalidad y eficiencia en el sector externo de la economía, realizándose principalmente en el mercado mundial. Pero esta inserción, siendo la región aún eminentemente exportadora de materias primas (con mercados limitados por los proteccionismos de los países desarrollados y a la baja de los precios internacionales de nuestros productos) y con desventajas tecnológicas en el terreno competitivo, sólo ha podido efectuarse explotando los beneficios de salarios extremadamente bajos.⁷ La disminución en términos absolutos del valor de los salarios en los costos de producción⁸ ha requerido de la eliminación de todos los mecanismos de negociación que pudieran modificar esos valores y de la imposición de una rígida disciplina económica de los sectores subordinados. Estas políticas han provocado efectos desastrosos para los mercados nacionales y difundido la idea, entre sectores productivos vinculados al mercado interno, de que la sobrevivencia como capitalistas depende de tornar sus ojos "hacia afuera", llevándolos tanto a asociarse con el capital transnacionalizado como a modificar sus prácticas productivas en un sentido más especulativo.

En términos estatales, ninguno de estos sectores burgueses exhiben un interés por proponer e imponer políticas de tipo consensual, puesto que en las condiciones actuales de miseria y marginalidad en nuestros países, los acuerdos sólo podrían construirse afectando los niveles de acumulación capitalista. En donde hubieron intentos por delinear proyectos más nacionales y autónomos, a partir de sectores de la clase política, como en Perú o Argentina, la respuesta burguesa fue y es contundente para bloquearlos, dejando al descubierto la incapacidad dominante para representar proyectos nacionales con un mínimo grado de autonomía política y estatal.⁹

⁷Moisés Ikonicoff, Secretario de Planificación de Gobierno del actual presidente argentino Saúl Menem, declara: "Lo que hay en un proceso de acumulación es sacrificio interno y tal vez en ese proceso los salarios no tengan el nivel adecuado frente a los precios necesarios para internacionalizar un sector de la economía... Pero esto es insoslayable, porque el sistema internacional es cada vez más integrado y excluyente al mismo tiempo... Nosotros o nos incluimos o sonamos. Para eso vamos a requerir competitividad. Y esto en un primer tiempo, que es el de la acumulación, impone sacrificios a gran parte de la población. Esto mismo pasó con la revolución industrial". *Brecha de Uruguay*, de agosto de 1989.

⁸Para citar sólo un ejemplo, en México, la participación del salario en el PIB pasó del 35.8 por ciento en 1982 a poco más del 20 por ciento en 1986. Véase, Graciela Bensusan: "Reconversión Industrial: concertación social y derechos laborales en México", revista *Argumentos*, UAM Xochimilco, abril de 1989.

⁹En Argentina, los planes del que fuera el primer Ministro de Hacienda de Raúl Alfonsín, Bernardo Grinspun, que buscaban una política de mayor autonomía, fueron desbaratados por el caos organizado por los grandes acreedores extranjeros encabezados por el City Bank (cuyo representante es Presidente de la Cámara Bancaria), los grandes empresarios llamados los "Capitanes de la Industria" y la derecha. La inflación trepó el 30 por ciento mensual tragándose rápidamente el incremento precedente en el salario real. El posterior Ministro Sourrielle aceptó las condiciones impuestas por los empresarios y acreedores de congelación de salarios, mientras la inflación siguió incrementándose. En mayo de 1989, el salario mínimo llegó a 20 dólares. (*Semanario Brecha de Uruguay*, 12 de mayo de 1989.)



La recuperación de acciones estatales en favor de redistribuciones más equitativas de la riqueza, también se han visto bloqueadas por los roles subsidiarios de los Estados respecto de la reproducción del gran capital mediante fuertes endeudamientos y los déficit fiscales: Estados que se han hecho cargo de las deudas contraídas por los particulares con los bancos privados;¹⁰ endeudamientos privados —que pasaron a cargo del Estado— y cuyos montos reales fueron transferidos por los deudores en fuertes sumas al exterior sin haberlos destinado productivamente;¹¹ endeudamientos externos que no fueron utilizados productivamente sino para transacciones especulativas. En la mayoría de nuestros países, los subsidios estatales a través de desgravaciones impositivas y proyectos industriales de promoción, beneficiaron a sectores del gran capital en la diversificación de actividades económicas y

¹⁰En enero de 1983 se estatizan la mayoría de los bancos privados chilenos, haciéndose cargo el Estado de deudas por unos mil millones de dólares; en Uruguay, desde 1982 y hasta 1987 el Estado se hace cargo de las carteras vencidas incobrables de los bancos privados con un costo superior a los 700 millones de dólares; en Argentina, en 1982, el entonces presidente del Banco Central y hoy Canciller del gobierno de Menem, Domingo Caballo, comenzó a estatizar los pasivos privados a través de los seguros de cambios, lo que se tradujo en un subsidio neto del orden de 8,725 millones de dólares para la banca.

¹¹El Banco Mundial estimó que entre 1976 y 1982 la fuga de capitales de Argentina alcanzó los 19 mil millones de dólares, cifra que el Morgan Guaranty Trust of New York elevó a 26 mil millones de dólares. Igualmente en México las fugas de capital muchas veces solventadas con el gasto y el endeudamiento público ascendería a un porcentaje elevado de su deuda externa. En 1989, los cien principales grupos económicos de Uruguay concentran el 51.4 por ciento del préstamo bancario estatal, unos 2500 millones de dólares, dinero que no se invirtió productivamente —algunas empresas incluso se declararon en quiebra—, habiéndose fugado de esta suma un porcentaje elevado.

en la concentración y centralización del capital.¹² Por lo demás, en los momentos más agudos de las crisis, con disminuciones drásticas de los salarios reales, la redistribución regresiva del ingreso tuvo como contracara el crecimiento vertiginoso de las ganancias de los grandes empresarios.¹³ Esta realidad obligó a desmistificar la prédica neoliberal de haber disminuido la participación económica del Estado; si se ha adelgazado su función económica redistributiva y social, pero su intervención económica a favor de la acumulación capitalista se ha incrementado notablemente.

Como se sabe, esta realidad no se ha modificado por las democratizaciones de los diferentes países, sino que han seguido tendencias crecientes tanto en los efectos catastróficos para las mayorías populares, como benéficos para el gran capital. El caso más dramático sea tal vez el de Argentina, que de ser el país más rico de Sudamérica en la primera mitad del siglo, observa niveles de miseria insospechados;¹⁴ el ascenso del peronista Saúl Menem a la presidencia está lejos de modificar la situación, por cuanto el gran capital monopólico ha logrado privatizar también al ministerio de Economía, poniendo al frente suyo a los ex gerentes del principal grupo económico: Bunge y Born.

No corre distinta suerte el otrora proyecto reformista de la socialdemocracia en América Latina. Una referencia obligada es el "caracazo" ocurrido 15 días después de asumir la presidencia en Venezuela el líder socialdemócrata Carlos Andrés Pérez en febrero de 1989.¹⁵ La otra, no

¹²No deja de ser sugestivo que navegando en la estrepitosa crisis argentina, entre 1973 y 1987 los doce grupos económicos nacionales más importantes pasaron de operar con 149 empresas en 1973 a 421 en 1987; Bunge y Born, representada en el gobierno de Menem en sus dos sucesivos Ministerios de Economía, es un grupo económico que posee 86 empresas (informe de junio de 1989 de la Secretaría de Planificación de la Presidencia: "Las formas empresariales multiarticuladas en la actividad económica nacional: los grupos económicos nacionales y las empresas transnacionales diversificadas, 1983-1987", publicado parcialmente en *Brecha de Uruguay*, 18 de agosto de 1989).

¹³En México, en los seis peores años de su crisis económica (1983-1987), los 300 más grandes empresarios ("los 300 de Legorreta") obtuvieron sólo en 1987 ganancias por 29,240 millones de dólares, equivalente a un 40 por ciento del PIB en activos; son ganancias 26 veces más elevadas a las obtenidas entre 1977 y 1982 (*Excelsior* de México). En Perú, en 1972 los asalariados recibían un 51.2 por ciento del ingreso nacional mientras las utilidades correspondían al 17.5 por ciento del mismo; en 1985, los salarios corresponden al 30.8 por ciento del ingreso nacional y las utilidades a un 40.9 por ciento. (BCR Memoria 1986 INP, elaborado por el Programa de Formación Laboral de DESCO. Revista *Quehacer*, octubre de 1988, Lima.) En Argentina, la participación de los salarios en el ingreso nacional pasó de 43 por ciento en 1974-1975 a 27 por ciento en 1988 (*Página 12* de Buenos Aires, publicado en *Brecha de Uruguay*, 18 de agosto de 1989).

¹⁴En Argentina, está en situación de extrema pobreza un 7.5 por ciento de la población en 1982 y un 24 por ciento en 1987; hay 5 millones de desocupados; el índice de desocupación y subempleo pasó de 8.6 por ciento en 1984 a 16.0 en 1989 (INDEC); se producen 20 mil muertes infantiles anuales por hambre (declaraciones de Jorge Rachid, Secretario de Prensa y Difusión del Gobierno); los salarios reales son un 70 por ciento menores en diciembre de 1988 respecto de julio de ese mismo año; la inflación de enero a julio de 1989 fue de 2,014 por ciento en artículos de consumo (*Brecha de Uruguay*, 12 de mayo de 1989 y 18 de agosto de 1989).

¹⁵Siendo hasta 1983 el país con el mayor ingreso per cápita de América Latina y con un exceso de divisas provenientes de la "década dorada del petróleo" (1974-1983), la distribución del ingreso es altamente regresiva: un 12 por ciento

menos destacable, es la asunción presidencial del líder del Movimiento de Izquierda Revolucionaria de Bolivia, Jaime Paz Zamora el pasado agosto de 1989, con el apoyo de las fuerzas más derechistas del banzerismo y con la garantía de la continuidad de la misma política económica estabilizadora de su antecesor Paz Estenssoro: "Se inicia un nuevo período donde no tendrán cabida ni populismos ni radicalismos", declaró en el discurso de asunción ante el Congreso.¹⁶

Es difícil predecir cuándo los límites que se han impuesto al desarrollo integral de las economías nacionales puedan significar un obstáculo insalvable para la realización del capital bajo la hegemonía del capital financiero, pero a la fecha este nuevo capitalismo encuentra mecanismos no sólo de sobrevivencia sino de fortalecimiento y ahonda así las tendencias derechizantes en las formas de dominación de nuestros países. La posibilidad de su ocurrencia refiere inevitablemente al análisis de las condiciones políticas de la dominación que impiden estallidos catastróficos del capitalismo latinoamericano al finalizar esta crítica década de los ochenta.

De la contrarrevolución a la negociación

La implantación de este "modelo" de reproducción capitalista, llamado "neoliberal", como estrategia global capitalista en términos económicos y políticos, data de comienzos de la década de los setenta y debió enfrentar entonces importantes resistencias populares, en circunstancias en que se observaba un significativo proceso de avance popular en la región. Si este avance popular era ya un síntoma de agotamiento hegemónico dominante, las violentas condiciones en que se trató de imponer la nueva estrategia capitalista, agudizaron las condiciones de crisis de la dominación.

La modificación de la correlación de fuerzas a favor de los sectores explotados en América Latina es un dato de este proceso de modificación derechizante de las modalidades dominantes, que muchas veces se olvida. Desde finales de los sesenta, casi todos nuestros pueblos son protagonistas de esos avances: desde experiencias de gobiernos populares, como la Unidad Popular en Chile (1970) y del Movimiento Nueva Joya en Granada (1979); experiencias populistas protagonizadas por sectores progresistas de las fuerzas armadas como la de Velasco Alvarado de Perú (1968), de Omar Torrijos en Panamá (1968), de Juan José Torres en Bolivia (1970), de Rodríguez Lara en Ecuador (1975); avances de sectores reformistas como el peronismo de Héctor Cámpora en Argentina (1973), de Michael Manley en Jamaica (1974) de Carlos Andrés Pérez en Venezuela (1974), de José Figueres (1970) y Daniel Odúber

concentra el 75 por ciento de los ingresos y un 70 por ciento se distribuye entre el 10 y el 15 por ciento de los ingresos (Oficina Central de Planeación). Tras el descenso de los precios del petróleo y el fuerte endeudamiento externo, la presentación del programa de reestructuración económica acordado con el FMI por el gobierno de C.A. Pérez tuvo la respuesta conocida. Ver revista *Quehacer*, abril de 1989, Lima.

¹⁶La reducción de la inflación anual de 24 mil por ciento a 15 por ciento en 1989, se logra en Bolivia con el 60 por ciento de la población en indigencia y el 20 por ciento en situación de extrema indigencia. (*Brecha de Uruguay*, noviembre de 1989).

(1974) en Costa Rica, del Partido Revolucionario Dominicano en República Dominicana (1979); conquista de la independencia nacional en Barbados (1973), Suriname (1975), San Vicente (1979), Santa Lucía (1979), Dominica (1978) y Belice y Antigua y Barbuda (1981); la proclamación de la República Cooperativa de Guyana (1975); consistentes avances de la izquierda como el Frente Amplio en Uruguay (1971); apertura política aunque limitada de la dictadura brasileña con Figueiredo y retorno de los exiliados (1979), la firma de los Tratados Torrijos-Carter sobre el Canal de Panamá (1979), avances del movimiento estudiantil y popular en México (1968); e, incluso, revoluciones triunfantes como la nicaragüense (1979). También en esa década se rompe en gran medida el cerco de aislamiento impuesto sobre Cuba, tras varias reanudaciones de relaciones diplomáticas con la isla socialista. Todas ellas son expresiones de un torrente popular en marcha, de un cambio en la correlación de fuerzas, de presión y resistencia a las modalidades excluyentes del capitalismo latinoamericano; y todas, de un modo u otro, fueron factores de profundización de la crisis dominante.

La respuesta dominante e imperialista en los setenta tuvo en América Latina un carácter esencialmente contrarrevolucionario, lo que la distingue claramente de las derechizaciones en Europa y Estados Unidos, donde, como reconoce Agustín Cueva, se vivían ya en los setenta situaciones de reflujo de los proyectos y movimientos revolucionarios,¹⁷ imponiéndose con una violencia de grados diversos según la magnitud del "peligro", mediante golpes de Estado, intervenciones abiertas, contrainsurgencia, presiones económicas internacionales, anticomunismo, etcétera. En esa respuesta contrarrevolucionaria, las fuerzas armadas jugaron el papel de "garantes del orden" y de rescatadores del sistema, a pesar, incluso, de la clase política. La Doctrina de la Seguridad Nacional que desde los años de la guerra fría viene aportando un contexto ideológico conservador en las fuerzas armadas, y que confluye con los valores conservadores de la propia lógica institucional jerárquica, aportó el mandato imperativo que permitió a las fuerzas armadas acudir al llamado de la burguesía (servicio que hasta la fecha le siguen recordando y cobrando) y les dio un protagonismo político de primer orden, a través del cual se fueron realizando muchos de los dictados del Pentágono y que otrora pudieron haber enfrentado diferentes niveles de obstrucción o tamizamiento.

Con toda la profundidad de esta respuesta contrarrevolucionaria de los setenta, sin embargo (y más allá de los dolorosos costos que supuso), ella no logró eficientemente su objetivo refundacional de nuestras sociedades: la generación de nuevos consensos sobre los principios del orden social, la fragmentación social, el individualismo y una salvaje competencia para sobrevivir. A finales de los setenta, el problema de la estabilidad de la dominación seguía estando pendiente. Y a comienzos de los ochenta, el fantasma de la revolución nicaragüense incorporaría nuevos elementos para el temor dominante a lo popular, con su incapacidad estructural de neutralizar los posibles peligros que entrañaba la intensa conflictividad social que atravesaba a la región.

¹⁷Dice Agustín Cueva: "Lo que resulta paradójico es que esta fobia anticomunista se desencadene en un momento en que los comunistas europeos están por regla general en pleno repliegue, luego de que política e ideológicamente se han desplazado hacia el 'centro', es decir, hacia posiciones muy próximas a las de la socialdemocracia". "El viaje conservador..", *op. cit.*, p. 30.

La crisis de la dominación burguesa en términos de hegemonía y consensos sigue marcando de manera clara los procesos en la presente década (aunque esta dominación se haya fortalecido en cuanto al ejercicio de la fuerza) y no logra resolverse a finales de la misma, a la luz del empeoramiento de todos los indicadores socioeconómicos en la región, como refiriéramos anteriormente.

Hacia finales de los setenta y comienzos de los ochenta, los procesos concentradores y transnacionalizadores habían desplazado de la hegemonía económica a importantes fracciones burguesas carentes de espacios políticos para negociar sus intereses en los países con dictaduras, fenómeno que intensificó los conflictos al interior de la clase en el bloque de poder. En el plano popular, la miseria y las correspondientes demandas se vieron articuladas indisolublemente a los reclamos de libertades políticas, que suponían no sólo liberarse de las violentas represiones a que fueron sometidas las mayorías latinoamericanas, sino también de la percepción de que con esas libertades se obtendrían espacios de negociación y presión para una distribución más equitativa de la riqueza. Para los intereses imperialistas, las experiencias de dictaduras al calor de los avances de la revolución nicaranguense, advertían sobre inestabilidades peligrosas del sistema en su conjunto y de sus propios intereses.

Al comenzar los ochenta, el tema de la democracia, el privilegio de la negociación, fue el signo característico de la acción política, lo "nuevo". Para los dominantes, la recuperación de espacios representativos suponía la posibilidad de rearticular las alianzas en los bloques de poder. Para los sectores populares, la democracia era, y es, una demanda sin duda histórica pero asociada a su nueva y dramática situación social. Para el imperialismo, la negociación política pasaba a cubrir espacios de pérdida de eficiencia en sus políticas de intervención directa. Así, el signo negociador recorre toda la región: en los países con dictadura, asociado a la recomposición de formas democrático-representativas; en Centroamérica, como mecanismo de manejo del enfrentamiento a Nicaragua y a los movimientos insurgentes de El Salvador y Guatemala; en países con sistemas democráticos insuficientemente representativos, como forma de absorción de las demandas en este sentido.

La negociación, como forma política y como mecanismo para rearticular situaciones dominantes, se realiza en todos nuestros países como se ha visto, sin abandonar los objetivos y las prácticas económicas de la década anterior. Los objetivos son los mismos, se pretenden cambiar los medios para garantizar la estabilidad del sistema en las condiciones críticas antes referidas. La negociación política y la democracia, como su forma concreta de realización, pasan a ser para las clases dominantes instrumentos políticos de administración de la crisis.¹⁸ Una adminis-

¹⁸En relación a la contienda preelectoral dentro del gobernante Partido Colorado de Uruguay, el diputado de ese partido Daniel Lamas declara en junio de 1989: "El doctor Batlle supo canalizar a su favor el descontento que cualquier gestión gubernamental provoca, más allá de que en el caso de este gobierno no sea justo que eso ocurra, en la medida en que el presidente Sanguinetti fuer capaz de completar en paz la transición y administrar la crisis sin que el país se precipitara en una hecatombe inflacionaria y social" (Reportaje en *Semanario Brecha de Uruguay*, junio de 1989.) La alusión de hecatombe por la realidad argentina, no oculta sin embargo el ahondamiento de la miseria, la creciente inflación y la conflictividad social permanente en Uruguay.

tración política de la crisis que tiene por premisa el logro de la absorción, —cuando no la eliminación de hecho imposible— de la conflictividad social originada por la reproducción dominante capitalista, esto es, la eliminación de demandas y presiones populares sobre el sistema: la gobernabilidad. Dicho con otras palabras, esta administración disoció las demandas políticas de las económicas, cuya articulación formó parte de las percepciones y las acciones populares en todo el período anterior e impidió la eficiencia refundacional de nuestras sociedades a partir de las diferentes formas autoritarias de la dominación. Una forma, por lo demás, que permita recomponer los mecanismos de mediación política sin recomponer las mediaciones que caracterizaron el período desarrollista. La gobernabilidad pasa a ser así, la dimensión política de la derechización dominante en los ochenta, una nueva práctica respecto a la dictatorial. Entre ésta y la gobernabilidad existen diferencias que no pueden ser despreciables para la realización de los intereses populares; en esencia ambas persiguen los mismos objetivos excluyentes pero buscando obtener niveles de legitimidad superiores, un mínimo de “aprobación interna” al sistema, aun cuando no se hayan logrado atenuar las causas económico-sociales de la conflictividad.

Gobernabilidad y derechización en los ochenta

La acción política de los sectores dominantes en nuestra región en esta década está así atravesada por la contradicción entre la aplicación de políticas económicas excluyentes con determinaciones internas y externas y búsquedas de legitimación de la dominación.

En el plano social, estas políticas subordinadas al interés capitalista mundial aumentan las formas de desplazamientos específicos de fracciones sociales incrementando los niveles de resistencia popular, lo cual hace “ingobernables” las sociedades latinoamericanas. Las preocupaciones “trilateralistas” tienen hoy mayor actualidad e incrementan la necesidad dominante de imponer en América Latina “democracias gobernables” o “viables”.

En prácticamente todos nuestros países, la absorción de la conflictividad y de las oposiciones al sistema se realiza a través de dos mecanismos: el primero opera en el plano social, con un manejo diferenciado de instrumentos, realizando concesiones a algunos sectores, por mediaciones con otros y reprimiendo directamente a los menos neutralizables; busca garantizar con ello un nivel de fraccionamiento y competitividad social permanente que elimine cualquier peligro de plasmación de una fuerza social alternativa homogénea. Así, se atienden intereses de unas regiones desatendiendo otras, se autorizan ciertos servicios de tipo “informal” reprimiendo otros; se satisfacen reivindicaciones salariales de ciertas zonas sindicalizadas deprimiendo a otras, o se reconocen derechos sindicales a ciertas organizaciones y se reglamenta el derecho de huelga de las más combativas (“servicios esenciales” en Uruguay, ilegalizaciones de huelgas de petroleros en Brasil, inflexibilidad absoluta con el Sindicato de Trabajadores de la UNAM en México, represión a los médicos en República Dominicana, etcétera. El segundo mecanismo es la negociación política, que se propone aislar las esferas de lo político y de lo económico, de tal suerte que entre partidos y clases subalternas no se produzca ningún tipo de representación

real, sometiendo a los actores populares a dos escenarios paralelos de su actuación.

El propósito es constatable en prácticamente todos nuestros países, más allá de los rasgos específicos del sistema político de cada uno; mientras, por un lado, se maneja el diálogo y la negociación con los partidos de oposición de izquierda —utilizando al Parlamento como espacio privilegiado— por otro lado se maneja el conflicto de base económica de modo más represivo. Así encontramos que mientras se está negociando políticamente con el Justicialismo, se reprimen las acciones de la CGT (dirigida también por peronistas) en Argentina; lo mismo ocurre en Uruguay, con diálogos con el Frente Amplio simultáneamente al hostigamiento a dirigentes sindicales del PIT-CNT (la mayoría de ellos de filiación frenteamplista); la experiencia se repite en Brasil respecto del Partido Trabalhista, el Partido Democrático Trabalhista y hasta el Movimiento Democrático Brasileiro; en Bolivia se negocia con diputados de izquierda formas de represión estatal al narcotráfico en tanto se reprimen a los sectores mineros de la COB, desempleados de las minas de estaño y volcados a la plantación de coca. En México, aunque se da la admisión “por la fuerza de los hechos” de una oposición parlamentaria de izquierda, es más que probable que no se aceptará una central sindical paralela a la oficial cuyos dirigentes fueran de filiación “cardenista”.¹⁹

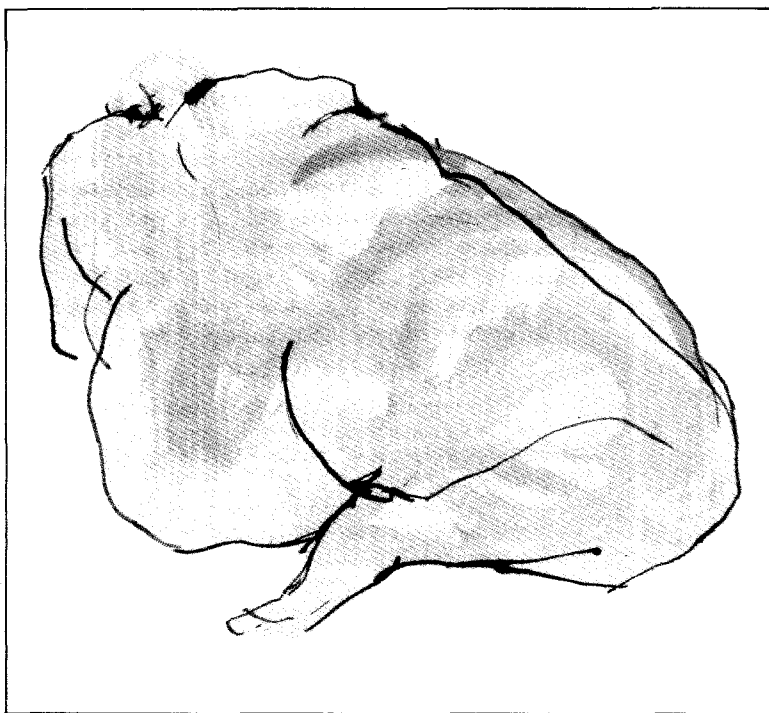
La existencia de una negociación política aislada del interés material popular —rasgo “característico” de la política dominante actual en la región— ha sido legitimada por nuestras sociedades (por lo menos hasta ahora) sobre la base de haberse explotado sus necesidades y aspiraciones de democracia y libertades, mediante el ejercicio de un verdadero “chantaje democrático”. El telón de fondo para la mayoría de los casos en la región, es la presencia de las fuerzas armadas autoasumidas como garantes de la estabilidad frente a los peligros que conlleva todo tipo de confrontación social. En los países con experiencias dictatoriales, se explota el trauma popular de la represión, revivida como un riesgo permanente donde las clases dominantes establecieron alianzas con las fuerzas armadas para la redemocratización (Brasil, Uruguay, Honduras, por ejemplo), o bien donde en democracia mantienen un nivel de negociación con ellas (Argentina). Es evidente que si se puede hacer chantaje es porque el referente del mismo tiene un grado de realidad innegable, como lo demuestra la reunión de Ejércitos en Mar del Plata en noviembre de 1987. Las fuerzas armadas siguen reivindicando y en sentido ampliado, el derecho a tutelar nuestras sociedades, a reconocer en toda expresión popular un signo de “guerra de baja intensidad”.²⁰ Pero el

¹⁹La negociación política con el cardenismo no se compadece con las acciones de liquidación de un movimiento gremial como el de Ruta 100 en 1989, o la distinción entre lo “democrático” y lo “salarial” en el conflicto magisterial de 1989.

²⁰La reunión de Ejércitos Americanos realizada en Mar del Plata (Argentina) en noviembre de 1987, y cuyas actas secretas fueron dadas a conocer en la prensa de Argentina, Brasil y Uruguay, mantienen el mismo tono y contenido, aumentado y expandido, del que se proclamara y proclama en las dictaduras militares. No hay un solo sector de la sociedad, desde la izquierda hasta la Iglesia que no esté bajo la mira de las FFAA, que generalizan a toda la región las estrategias de “guerra de baja intensidad” y “conflicto de baja intensidad”, variantes particulares de las estrategias de los años sesenta (contrainsurgencia, anticomunismo, etcétera), incorporando el “narcotráfico” como justificación intervencionista.

uso que se hace de esta realidad trasciende normalmente todo análisis concreto de la misma, se erige como dato irrefutable, atemporal, en circunstancias, por lo demás, en que las fuerzas armadas reconocen haber perdido legitimidad social en la región y sabiendo que sus mismos principios autoritarios pueden ser llevados a cabo por gobiernos civiles. Si la convocatoria "civil" dominante a las fuerzas armadas dio variados frutos, éste es uno de ellos; al colocar a estos "civiles" como víctimas inocentes del proceso. Pero en otros países, donde las fuerzas armadas no ocupan un espacio político significativo, el Estado asusta con la "desestabilización de la democracia" por la posible emergencia de fuerzas de "derecha" o "pronorteamericanas" como "resultado" de acciones populares, como ocurre en Perú respecto a los movimientos guerrilleros, en Costa Rica bajo la presidencia de Arias respecto al movimiento sindical, en la campaña política de Carlos A. Pérez (Acción Democrática), en Venezuela y en las respuestas del Partido Revolucionario Institucional (PRI) frente a los reclamos populares de respeto al voto en México.

El escenario privilegiado de la realización de la gobernabilidad, el espacio institucional por excelencia, es el Parlamento. El fenómeno parlamentario no puede tratarse sin vincularlo al problema más general del Estado. Sin pretender adentrarnos en la polémica sobre la cuestión estatal, es evidente que las transformaciones de la actividad económica estatal, que analizáramos anteriormente, han contado con el Parlamento como instrumento relevante. De hecho, la mayoría de las leyes que se aprueban en los Parlamentos latinoamericanos responden casi con nombre y apellido al interés de un grupo económico o sector empresa-



rial.²¹ El Estado se convierte en un agente directo de la "neoligarquización" de la dominación (categoría rescatada por Eduardo Ruiz Contardo en sus trabajos), que se acentúa por la constante sustitución de la llamada "clase política" (factor de "universalización" estatal frente a la sociedad) por personeros directos o indirectos del capital, sean empresarios o tecnócratas, cuyas metas de eficiencia y modernización convergen con la reestructuración capitalista producida. La liquidación por este medio de la autonomía relativa del Estado no ha sido contrarrestada, hasta la fecha, por los Parlamentos latinoamericanos (con la posible excepción del peruano), aún admitiendo que en ellos se presente "formalmente" una "unidad nacional".

La neutralización de las funciones democráticas del Parlamento, su "desnaturalización" crítica, tiene que ver con las relaciones entre poderes del Estado, con la creciente tendencia a "presidencialismos", al fortalecimiento del Estado en cuanto ejercicio de la fuerza, a las "vetocracias" que se repiten en muchos de nuestros países y a la "utilización" política del espacio negociador parlamentario que realizan los sectores dominantes. Para éstos el Parlamento es (bajo el supuesto de mayorías) un espacio de legalización de su interés corporativo (podríamos hablar de una "corporativización de la política" en los dominantes); pero el parlamento representa, a la vez, un espacio de "descorporativización de la política de los sectores subalternos", es decir, una instancia de negociación donde los partidos no puedan representar el interés popular. Desde el interés dominante, el Parlamento es un lugar de mediación privilegiada, en el que sí se permite el libre juego de los partidos (bajo las reglas que excluyen todo tipo de confrontación factual o verbal), pero en donde no tiene cabida la negociación salarial o similar.

Esta manipulación de clase que realizan los dominantes sobre el parlamento, aunque desnaturaliza sus roles democráticos no es en realidad una conducta novedosa, ajena a los mecanismos tradicionales de mediación para la dominación en la democracia burguesa (de hecho, también en esto radica la distinción marxista entre democracia "real" y "formal"). Es sí una cuestión de grados, de intensidad, que por su magnitud compromete la propia lógica mediadora de la representatividad en la democracia burguesa.

Sin embargo, si la gobernabilidad, entendida como manejo neutralizante del conflicto, ha tenido ciertos niveles de éxito a través de las mediaciones políticas, si ha logrado debilitar la representación política de los intereses populares por encorsetamientos de las fuerzas de izquierda a ciertas reglas del juego impuestas por el sistema, paradójicamente no ha logrado eliminar la por demás creciente conflictividad social. Los "dos escenarios" a los que aludíamos tienen aún un grado de disociación en la política popular, en la medida en que los condicionamientos del sistema político han dificultado a la izquierda un redimensionamiento político de las demandas sociales, de integrar lo económico y lo político, y no logrando así impedir que las búsquedas dominantes de

²¹ Leyes que sancionan compras o intervenciones estatales a bancos privados quebrados; modificaciones arancelarias que favorecen a exportadores; exportación de materias primas sin procesar que favorece a los ganaderos; regímenes preferenciales para la inversión extranjera; tarifas preferenciales de servicios, etcétera, destacándose en particular las leyes presupuestales que favorecen el interés dominante y las presiones corporativas de las fuerzas armadas.

gobernabilidad muestren avances en la realización del proyecto excluyente, pero a costa de convertir a la democracia representativa en una verdadera ilusión democrática, valga la redundancia.

Trascender las visiones políticas "posibilistas", es un verdadero desafío para la izquierda latinoamericana en la búsqueda de articular un proyecto nacional-popular que sea alternativa real y concreta a la dominación derechizante; que logre convertir en fuerza política las variadas y multiplicadas expresiones sociales críticas y opositoras al sistema capitalista. Las demandas sociales de sobrevivencia apuntan directamente a la trastocación de las fuentes mismas de la acumulación capitalista, se trata de un anticapitalismo objetivo, no siempre asumido como tal en términos de conciencia, pero que supone un potencial que aún está por realizarse en términos de una articulación anticapitalista consciente. No obstante, el potencial popular llega por momentos a niveles elevados de expresión (a pesar muchas veces de la carencia de una conducción política que interprete los datos de la nueva realidad y los transforme en fuerza real) con magnitudes que revelan lo que está engendrando la derechización dominante: la avalancha popular a través del voto en México contra la política económica del gobierno fue mayor de lo que los propios partidos suponían; las elecciones municipales en Brasil; el voto popular ecuatoriano contra el gobierno ultraderechista de Febres Cordero; el signo de pan y libertad del NO popular al plebiscito en Chile, la combatividad sindical en Perú y Argentina; el paro general "Por la Vida" en Colombia en 1988, etcétera.

Por ello, no puede hablarse de derechización en América Latina, aunque hay conductas prudentes y hasta conservadoras en muchos sectores populares amenazados por la pérdida de empleo y por la competencia a la que les somete el fraccionamiento social. Sin embargo, cuando surge una opción mínimamente coherente y articulada de proyecto político que los interprete y represente, su capacidad de lucha se despliega y multiplica. La derechización no es un fenómeno al margen y por encima de las clases. Podemos afirmar sin temor que la derechización dominante avanza y lo hace, más aún, cuando también avanzan en sus luchas organizaciones de los sectores populares. Y por ello, más allá de todas las sofisticadas teorizaciones respecto al Estado como "espacio de intersubjetividades", de expresión indeferenciada de ciudadanos "iguales", al Estado latinoamericano no le va quedando más que su contenido de fuerza, su rol descarnado de agente de la nueva oligarquía, capaz de sacrificar, incluso, los formales bienes políticos conquistados recientemente en muchos de nuestros países.

Una "nueva derecha" latinoamericana

Hay, en prácticamente todos nuestros países, sectores de derecha que han sido sensibles a los problemas antes mencionados y que consideran que las prácticas dominantes actuales, lejos de resolverlos tienden a agravarlos. Son sectores preocupados por solucionar "definitivamente" la estabilidad del sistema. Son en ese sentido más coherentemente conservadores que la mayoría de los gobiernos latinoamericanos y de derecha. Pero son innovadores en cuanto reconocen la necesidad de modificar ciertas conductas dominantes tanto en lo económico, como en lo político y social para arribar a los mismos objetivos. Por ese carácter innovador, los entendemos como Nueva Derecha.

Y no es porque hayan sido solamente estos sectores quienes comprendieran la funcionalidad de la negociación ya que de hecho han compartido las prácticas "redemocratizadoras" de los otros sectores de derecha "tradicional", sino porque han comprendido que la asociación de un liberalismo económico con un liberalismo político se realiza bajo ciertas condiciones que hoy la derecha tradicional, mayoritariamente hegemónica en el poder político, no vislumbra o no está dispuesta a considerar.

No es aún fácil identificarlos asociadamente a partidos o sectores corporativos específicos dentro de la clase. Su existencia es heterogénea, con mayor coherencia propositiva en países donde la derecha siempre tuvo un claro proyecto de poder, como en Chile, donde se vincula con el Partido Renovación Nacional y sectores de la Democracia Cristiana, o en Perú, donde la conciencia de no haber podido articular históricamente un exitoso (por hegemónico) proyecto propio frente a la poderosa oligarquía la estimula a aparecer con fuerza alternativa en la actualidad en torno a los tres partidos que integran el Frente Democrático (FREDEMO) que acaudilla Mario Vargas Llosa; pero son más difusos en países en los que privó una conducta dominante asociada a existencias menos pujantes de sectores oligárquicos y a burguesías más asociadas a aquéllos en su reproducción como tal. Tal podría ser la situación de los países tradicionalmente ganadero-exportadores en los que pudieron acumular históricamente sin esfuerzo, en donde existen burguesías especulativas, sin visiones de proyectos globales, y en las que predominó el interés inmediatista de la ganancia. Los encontramos en general dentro de los partidos y asociaciones gremiales empresariales intentando abrir camino a polémicas, como en el Partido Acción Nacional de México, en sectores del mismo partido oficial de ese país, en partidos como el PMBD en Brasil, dentro del radicalismo argentino, en el Partido Colorado de Uruguay, etcétera. Y todas ellas son expresiones llenas de matices y diferencias, cuyo estudio concreto está por hacerse, pero de las cuales se pueden extraer rasgos comunes que quisiéramos delinear.

Ante todo, tienen un rasgo modernizador, incluso de la política, en donde más desarrollo tienen. Se expresan principalmente en relación al ámbito de los temas económicos, como ocurre con los integrantes de *Renovación Nacional en Chile* donde llegan a hacer propuestas muy consistentes en un texto de gran interés por su grado de elaboración: *Desarrollo económico en democracia en Chile* de Felipe Larraín y otros, y los grupos que representa Hernando De Soto en Perú, cuya propuesta plasma en el conocido libro *El otro sendero*.²²

El principio común a todas las propuestas económicas de la Nueva Derecha es el liberalismo económico: respeto al derecho de la propie-

²²Larraín Felipe y otros. *Desarrollo Económico en Democracia*, Universidad Católica de Chile, diciembre de 1987. *El Otro Sendero*, de Hernando de Soto, publicado en Lima por la editorial El Barranco, en 1986; este libro ha llegado a ser promovido por el entonces presidente norteamericano Ronald Reagan. Sin embargo, en término de niveles de elaboración y de proyectiva, el libro de los autores chilenos supera largamente la mediocridad conceptual y los contenidos "quejosos" del libro peruano, el que frente al otro no merece haberse elevado a condición de "Biblia". Las referencias a las propuestas económicas de la Nueva Derecha provienen principalmente de ambos textos, pero tienen referentes específicos en todos nuestros países, que por razones de espacio no podemos incluir.

dad, mercado competitivo y abierto y que "contemple los mecanismos necesarios para asegurar igualdad de oportunidades y justicia social" (Larrain), pero no el liberalismo que De Soto denomina "ortodoxo" en lo macroeconómico pero que en niveles internos incorpora "dispositivos legales excluyentes y por tanto muy poco liberales". Coinciden con las demás posiciones neoliberales en su visión antiestatista, pero a partir de incorporar también una crítica explícita al burocratismo y corrupción del Estado originada, a su juicio, por el excesivo mercantilismo de la burguesía tradicional respecto al mismo y una falta de responsabilidad asumida como empresarios privados (algo de esto criticaba Julio María Sanguinetti a los empresarios uruguayos, aunque es difícil ubicarlo como partícipe coherente de estas corrientes). El antiestatismo que proponen lo identifican con una visión "renovada" del problema del desarrollo. Renovada respecto a la derecha gobernante pero no demasiado lejana a algunas concepciones desarrollistas.

Su estrategia de desarrollo está basada en un crecimiento sostenido de la economía que permita terminar con la extrema pobreza considerada como factor de inestabilidad del sistema. Para estas corrientes el problema de la gobernabilidad va asociado a la modificación de la marginalidad disfuncional al sistema, mas no a terminar con la desigualdad social que, dicen, en tiempos de igualdad de oportunidades ella es funcional a la competencia individual, atingente a la movilidad social. La redistribución de ingresos es válida para permitir la satisfacción de necesidades básicas. "Una vez logrado este objetivo, las desigualdades naturales que persistan no constituyen un motivo de particular atención" (Larrain). Su crítica al socialismo en cuanto "utopía igualitarista", tiene un tono menos grotesco al que formulan muchos sectores de derecha, pero está en la base de su proyecto histórico. Declaran perseguir también la felicidad de las mayorías pero con estrategias "más eficientes" que las del socialismo, las cuales generan crecimiento (Fernando Lemez Cerda) y sostienen que la izquierda es "excesivamente mercantilista" (De Soto), incapaz para promover el verdadero desarrollo.²³

Si la estabilidad del sistema pasa por eliminar sus contradicciones más agudas y la extrema pobreza en nuestros países, el crecimiento asociado a una redistribución funcionalizante constituye el eje de su elaboración. Se parte de la premisa que el solo juego libre del mercado no basta para generar crecimiento y estabilidad, aunque "sea el más eficaz para producir riqueza". Pero la "solidaridad social requiere medidas que corrijan los resultados del mercado para una mayor equidad, pero sin entorpecer la iniciativa privada, o sea, el crecimiento" (Larrain). Si el Estado disminuye excesivamente de tamaño y de funciones, predomina la "anarquía" (textual) del interés particular. Entonces el Estado, adelgazado hasta los límites que no afecten los intereses privados, debe cumplir ciertas funciones, siempre subsidiando el interés privado

²³Dice el chileno Fernando Léniz Cerda: "Es probable que aquí resida la diferencia más grande entre lo que, en general, se llama partidos 'de izquierda' y 'de derecha'. Los primeros tienden a tener mejor conocimiento de las urgencias de los sectores más desposeídos y de la percepción que ellos tienen de sus causas. Los de derecha, en cambio, tienen una idea muy clara de cuáles son las políticas que más rápidamente han de solucionar los problemas. Las discrepancias están en la estrategia a seguir para lograr ambos el mismo fin, que no es otro que la felicidad y el bienestar de los pueblos." (Introducción a *Desarrollo económico en democracia*, op. cit. p. 14-15.

(como "socio y no como acreedor") en medidas distributivas, con un gasto público hacia políticas sociales que eliminen la extrema pobreza y que no llegue a cuestionar la inversión por excesivas cargas fiscales; también funciones fiscalizadoras, y promotoras, como ordenador de las estrategias exportadoras, interviniendo productivamente y de manera subsidiaria en aquellas actividades que los particulares no puedan realizar. Su conceptualización estatal se resume en "un Estado chico no quiere decir débil" (Larrain). El Estado es realmente asumido como un instrumento para la realización del interés privado, y su existencia y roles se limita ante ese interés, pero sin desaparecer. La crítica que De Soto hace a la excesiva normatividad estatal que "ahoga la iniciativa empresarial" (la que para el autor proviene incluso de los vendedores callejeros de chicles), supone que el Estado debería disminuir particularmente en sus funciones normativas pero no en aquellas básicas como educación, salud, seguridad, etcétera, que se reconoce que no pueden ser abarcadas exclusivamente por los particulares.

Dicho de otro modo, la Nueva Derecha asume el problema de las mediaciones económicas, de manera mucho más cabal que la dominante derecha tradicional. Asume sacrificios en función de niveles de crecimiento que permitan disminuir las zonas de extrema marginalidad y con ello obtener legitimaciones políticas.

Las premisas en las cuales fundan su propuesta de crecimiento son la ruptura del círculo ahorro-consumo, para modificarlo hacia ahorro-inversión. Ello se incorpora a una crítica directa al despilfarro realizado en los últimos años, sobre todo bajo dictaduras; a mayores niveles de liquidez buscando soluciones negociadas y políticas a la deuda externa, a la que consideran la principal traba al crecimiento; y a una incorporación más racional al mercado externo, donde, según el teorema de Heckscher-Ohlin: "un país exportará una canasta de bienes en el factor productivo (capital o trabajo) relativamente más abundante e importará una canasta de bienes más intensivos en el factor más relativamente escaso".²⁴ Bajo este principio, América Latina podría resolver su desempleo exportando bienes intensivos en trabajo, y sus destinatarios deberían ser los países desarrollados. Principio contrario a las integraciones entre países pobres, de tipo sur-sur. Para ello será necesaria una acción estatal promotora de investigación (no necesariamente pública) para adecuar tecnologías a las condiciones regionales. La estrategia contempla la ampliación de los mercados al campo socialista, como parte de una negociación internacional global y útil económicamente.

Estas corrientes reconocen las posibilidades de gobernabilidad, de neutralización de conflictos, por la vía de un tratamiento económico específico por sectores interesados. El fraccionamiento social y la particularidad de las demandas, que pueden ser parcialmente satisfechas en buena proporción por niveles de crecimiento sostenido y excedentes económicos, puede llegar a funcionalizar la dominación si en la satisfacción de sus intereses particulares los diferentes grupos o movimientos sociales no llegan a coagular en proyectos de articulación nacional. De ahí que su interés por manejar las relaciones con los subordinados a través de fraccionamientos corporativos, no vea con malos ojos la multiplicación de movimientos sociales diversos y aislados, sino que los con-

²⁴Citado por Desormeaux en *Desarrollo económico en democracia*, op. cit.



sidere un elemento funcional a las mediaciones económicas y sociales de pequeña monta. Las coincidencias de estos planteos con muchos análisis que jerarquizan el "movimientismo" como un fin en sí mismo, no dejan de llamar la atención y reclamar una reflexión en torno a la proliferación de estas posiciones intelectuales tan coincidentes con el más refinado pensamiento de derecha en la región.

¿Cuál puede ser la viabilidad de estas propuestas, de este proyecto que se busca imponer polemizando con los sectores más tradicionales de la burguesía latinoamericana?

No es fácil predecirlo. Sin embargo, algunos indicios hay como para creer que la estabilidad del sistema se pretenderá todavía por mucho tiempo por acciones antipopulares descarnadas. No encontramos aún conductas dominantes proclives a estimular crecimientos por la vía del ahorro y la producción; las condiciones internacionales, si bien más fa-

vorables a la ampliación de los mercados traspasando "barreras ideológicas", presagian cerramientos proteccionistas significativos. La crisis de la economía norteamericana, con su déficit fiscal de más de 150 mil millones de dólares, con un endeudamiento público y privado que coloca al país del norte como el principal deudor del mundo con un saldo negativo entre lo que debe y lo que le deben de 141 mil millones de dólares en 1987, con una balanza comercial debilitada a un excedente de 3 mil millones de dólares, con destrucción progresiva del aparato productivo, con un ahorro consumista importador financiado con deuda pública y privada, siendo ya importador neto de capitales, y con una incidencia de indicadores sociales fuertemente afectados (salud, educación, vivienda, seguridad social, etcétera) que elevaron la tasa de pobreza a un 13 por ciento de la población total en 1987, anuncia un endurecimiento en el tratamiento económico hacia nuestros países. Los análisis norteamericanos de la crisis, como los de Peter Peterson²⁵ presentan un panorama apocalíptico. Podría ser menos grave, pero el hecho mismo de que la seguridad nacional sea ahora asumida como una dimensión económica, y que el jefe de las relaciones internacionales sea el muy conocido por América Latina James Baker, hace pensar en que pagaremos altos costos de esa crisis. Habrá una necesidad imperiosa de cobrar la deuda de nuestros países, de aumentar las exportaciones a nuestros mercados, de mayores proteccionismos hacia el suyo, en suma, una intensificación de nuestra condición dependiente y menores márgenes de políticas neoliberales más "autónomas", como las propuestas por la Nueva Derecha.

Las conductas mercantilistas de la burguesía de nuestros países hacia el Estado, serán una necesidad imperiosa para compensar sus debilidades en el mercado mundial. Las políticas redistributivas tendrán el espacio estrecho dejado por las dificultades de realización del capital en un mercado mundial probablemente más rígido. La pauperización progresiva de las masas tendrá que seguir siendo la fuente principal de la competitividad mundial. Y la deuda externa difícilmente podrá flexibilizarse en sus obligaciones, a menos que los inversores latinoamericanos en la banca internacional estén dispuestos a sufrir colapsos financieros. La devaluación progresiva del dólar (necesidad norteamericana para competir con Japón y Alemania Federal principalmente), redundará en menores utilidades del sector externo. Si no apocalíptico, el horizonte se ve muy oscuro para procesos de crecimiento sostenido en América Latina, al estilo que propone la Nueva Derecha, en países en que el crecimiento ha sido prácticamente nulo, a excepción de Chile que fue de cinco por ciento.

La gobernabilidad de nuestras golpeadas sociedades tendrá menos espacio para mediaciones de carácter democrático, y es probable que ella se realice más autoritariamente.

Como se ve, la existencia de una Nueva Derecha en América Latina no es la determinante de los procesos neo-oligarquizantes de la dominación. Es un ingrediente crítico de la misma acicateado por el contenido esencialmente antipopular que posee y que intuye peligrar. La

²⁵Ver "The day after", publicado en español ("Un día después") por la Revista Nexos. Núms. 127 y 128 de agosto de 1988, México. El título del artículo se refiere a la película homónima sobre la guerra nuclear y que tanto impacto provocó en Estados Unidos.

derechización dominante, como resultado de crisis económica y crisis hegemónica, hace a este fenómeno en la región profundo y no coyuntural; de qué tan irreversible sea dependerá de las condiciones actuales de reproducción del sistema, cuya posible modificación se relaciona con el desarrollo de capacidades sociales y políticas alternativas, un factor del análisis que nunca debe estar ausente.